**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA**

En Valencia, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

Vistos los presentes autos por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Srs. D^a DESAMPARADOS IRUELA JIMÉNEZ, Presidenta, D. ANTONIO LÓPEZ TOMÁS, D. EDILBERTO NARBÓN LAINEZ y D^a LAURA ALABAU MARTÍ, Magistrados, ha pronunciado, en nombre del Rey, la siguiente:

S E N T E N C I A N^o: 438

En el recurso contencioso-administrativo número 82/2021, deducido por [REDACTED] y otros frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alcoy de aprobación definitiva de la ordenanza de peatonalización de Alcoy (BOP de Alicante nº 33, de 18 de febrero de 2021).

Ha sido parte demandada el AYUNTAMIENTO DE ALCOY; siendo Magistrada Ponente D^a Desamparados Iruela Jiménez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso contencioso-administrativo, y seguido por los trámites legales, se emplazó a los demandantes para que formalizaran la demanda, lo que verificaron mediante escrito solicitando se dictara sentencia que declarase la nulidad de pleno derecho de la ordenanza impugnada y, subsidiariamente, la nulidad de su art. 8 y Anexo I, todo ello con expresa imposición de costas a la Administración demandada.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Alcoy contestó a la demanda por medio de escrito en el que solicitó el dictado de sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte contraria.

TERCERO.- Por la Sala se acordó el recibimiento del pleito a prueba, admitiéndose y practicándose las pruebas propuestas por las partes que fueron consideradas pertinentes. Finalizado el trámite de conclusiones, se declaró el pleito concluso, quedando los autos pendientes de votación y fallo.

CUARTO.- Se señaló la votación y fallo del asunto para el día 5 de julio de 2023.

QUINTO.- En la tramitación del proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los recurrentes, [REDACTED] deducen el recurso contencioso-administrativo, según ha sido apuntado, frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alcoy de aprobación definitiva de la ordenanza de peatonalización de Alcoy (BOP de Alicante nº 33, de 18 de febrero de 2021).

El objeto de esa ordenanza, según indica su art. 1, es la regulación del uso de las zonas de prioridad peatonal de Alcoy con el fin de recuperar el espacio para la libre circulación y el encuentro de las personas, el esparcimiento de los ciudadanos y para el juego libre de los niños tanto en las zonas de gran actividad comercial como en las calles, plazas y espacios objeto de la peatonalización, y con el fin de reducir la contaminación acústica y ambiental, aumentar la seguridad vial, promover hábitos saludables y gestionar adecuadamente las tareas de carga y descarga dentro de las calles de prioridad peatonal.

La ordenanza, señala su art. 2, es aplicable a las zonas de prioridad peatonal de Alcoy, figurando en el Anexo III las vías y zonas incluidas en el ámbito de la peatonalización.

En lo que a efectos de esta litis interesa, cabe reseñar asimismo que el Anexo I de la ordenanza regula las infracciones y sanciones por su incumplimiento.

SEGUNDO.- Solicita la parte demandante, como pretensión principal, la nulidad de pleno derecho de la totalidad de la ordenanza, por omisión por el Ayuntamiento de Alcoy de los siguientes trámites esenciales en su elaboración: la consulta pública previa realizada no se ajusta a lo establecido en el art. 133 de la Ley 39/2015; carencia de memoria de análisis de impacto normativo; conculcación de los principios de buena regulación previstos en el art. 129 de la mencionada Ley 39/2015; e infracción del art. 4.bis de la Ley 9/2013, por falta de incorporación del informe de impacto por razón de género.

Como pretensión subsidiaria, postulan los demandantes la nulidad de los siguientes preceptos de la ordenanza: art. 8, que regula la autorización para residentes; y Anexo I, que contempla las infracciones y sanciones por su incumplimiento.

Se opone el Ayuntamiento demandado a las alegaciones impugnatorias y pretensiones de los demandantes y aduce, en síntesis, que la ordenanza recurrida es ajustada a derecho.

TERCERO.- El primer motivo impugnatorio, relativo a la vulneración por el Ayuntamiento del art. 133 de la Ley 39/2015, lo plantea la parte demandante argumentando que el único documento que dicho Ayuntamiento sometió a consulta pública previa fue el borrador de "proyecto de ordenanza municipal relativa a la conversión en zona de viandantes en determinadas vías urbanas de Alcoy", acompañado solo de un plano que señalaba el área de afección. No se incluyó en la consulta previa, agregan los actores, ningún informe técnico ni memoria justificativos del proyecto de ordenanza, ni un estudio funcional de la propuesta o un estudio de ordenación pormenorizada del espacio público que analizara y planificara datos tales como los itinerarios peatonales, los puntos de conflicto y sus soluciones, la coherencia de la propuesta, la coordinación de la

actuación con los ejes verdes de la ciudad y las funciones urbanas o circulatorias del ámbito concreto de la actuación, no constando tampoco en la consulta previa ningún estudio de alternativas.

El invocado art. 133 de la Ley 39/2015 regula la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, disponiendo lo siguiente:

[“1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

- a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- c) Los objetivos de la norma.
- d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieran afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurren razones graves de interés público que lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella”].

La consulta pública previa que exige ese precepto legal es, como razona la STS 3ª, Sección 5ª, de 21 de febrero de 2023 —recurso contencioso-administrativo número 579/2022—, un trámite que, “al igual que el de audiencia e información pública, está destinado a instrumentar la participación ciudadana en los procedimientos de elaboración de las disposiciones administrativas que deriva de los mandatos contenidos en los arts. 9.2 y 105.a) CE, pero a diferencia del trámite de audiencia, de viejo anclaje en nuestro derecho que se articula sobre el proyecto de norma ya redactado, el de consulta pública del que aquí tratamos, que se introduce por primera vez en la Ley 39/2015, se realiza antes de redactarse el proyecto normativo, permitiendo con ello a la Administración tener un conocimiento directo de la percepción por los destinatarios de la norma de la concreta realidad que va a someterse al proceso normativo, de la necesidad u oportunidad de éste, de sus objetivos, problemas a solucionar o alternativas posibles, y todo ello, antes de su plasmación en un texto”.

La STS 3ª, Sección 2ª, de 31 de enero de 2023 —recurso de casación número 4791/2021— indica al respecto, por su parte, lo siguiente:

“El art. 133 LPAC regula específicamente dos consultas con el fin de proporcionar a los destinatarios de la iniciativa la ‘posibilidad de emitir su opinión’, previo acceso a ‘los documentos necesarios’, que serán ‘claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia’ (apartado tercero). Se afirman como obligatorias salvo en el caso de ‘normas presupuestarias u organizativas’ o cuando concurren ‘razones graves de interés público que lo justifiquen’ (apartado cuarto, primer párrafo).

La primera es la consulta a través del portal web previa a la redacción del borrador de ley o reglamento para recabar la opinión de los sujetos y organizaciones representativas potencialmente afectados acerca de los problemas que la iniciativa pretende solucionar, su necesidad, oportunidad y objetivos, así como otras posibles respuestas (apartado primero). Podrá prescindirse de ella en los casos citados y, además, si así lo prevé el régimen de tramitación urgente que resulte de aplicación y cuando la propuesta carezca de impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a sus destinatarios o regule aspectos parciales de una materia (apartados primero y cuarto, segundo párrafo).

La segunda consiste en la publicación del texto ya redactado en el portal web correspondiente a fin de dar audiencia a los ciudadanos afectados y conseguir cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades (apartado segundo, primer inciso)”.

CUARTO.- Lo primero que ha de determinarse en el caso de autos es si el mencionado trámite de consulta pública previa resulta de aplicación a la elaboración de la ordenanza municipal impugnada en la presente litis. El Ayuntamiento demandado niega en la contestación a la demanda que el trámite sea aplicable, por no estar contemplado en el art. 49 de la LRBRL.

Para resolver la cuestión ha de traerse a colación la STC 55/2018, de 24 de mayo, del Pleno del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad 3628/2016), que, en lo que ahora interesa, declara en su fundamento jurídico séptimo que “El artículo 133 (de la Ley 39/2015), en sus apartados primero,

primer inciso («Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública») y cuarto, primer párrafo, contiene normas con parecido tenor que pueden reputarse bases del régimen jurídico de las administraciones públicas (art. 149.1.18 CE), aplicables en cuanto tales a la elaboración de reglamentos autonómicos. Las demás previsiones del artículo 133 descienden a cuestiones procedimentales de detalle desbordando el ámbito de lo básico; vulneran por ello las competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas en relación con la elaboración de sus propias disposiciones administrativas”. Tal declaración, sin embargo, añade dicha STC 55/2018, no conlleva la nulidad de aludido precepto legal (en lo que no constituye sus apartados primero, primer inciso, y cuarto, primer párrafo), sino que, para remediar la invasión competencial enjuiciada por el TC en esa sentencia, basta, descartando la inconstitucionalidad del precepto, declarar que el precepto es contrario al orden constitucional de competencias y que, en consecuencia, no es aplicable a la iniciativa legislativa y reglamentaria de las Comunidades Autónomas.

La antecitada STS de 31 de enero de 2023 manifiesta, a la vista de la expresada STC 55/2018, que el art. 133 de la Ley 39/2015, en lo que excede de sus apartados primero, primer inciso, y cuarto, primer párrafo, tampoco es normativa básica aplicable a los entes locales, sin perjuicio de que resulte de aplicación supletoria. Ello por cuanto, afirma dicha STS, “Aunque tal declaración de inconstitucionalidad no se extiende explícitamente al ámbito de las Administraciones Locales, sí tiene relevancia en tanto que la declaración de inconstitucionalidad se sustenta en el carácter no básico de esta regulación, salvo los dos puntos ya exceptuados, y ello por cuanto el título competencial del Estado para regular el régimen local es aquí el mismo en que se fundamenta la regulación del art. 133 LPAC, esto es, las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, ex art. 149.1.18 CE. Luego, lo que no constituye legislación básica respecto a las Comunidades Autónomas, tampoco puede tener tal consideración de legislación básica respecto a la Administración local. Por consiguiente, hay que partir de esta premisa: el primer párrafo del art. 133, en su primer inciso, que establece la obligatoriedad de una consulta pública (“Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública”) es básico, al amparo del art. 149.1.18 CE, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, y, como tal, aplicable también a las Administraciones Locales. A partir de aquí, la consulta pública resultaría, en términos generales, obligatoria, si bien los demás aspectos de su realización, elementos que con mayor grado de detalle se regulan en el contenido restante del apartado 1 del art. 133 LPAC, no son normas básicas y, por tanto, no son aplicables directamente más que a los reglamentos estatales, no así a los reglamentos autonómicos y tampoco a los reglamentos en el ámbito de la Administración local. Todo ello, sin perjuicio de su aplicabilidad como norma supletoria, por su carácter de derecho estatal (art. 149.3 CE)”.

Acerca de la apuntada aplicación del art. 133 de la Ley 39/2015 como norma supletoria en la elaboración de las ordenanzas municipales, la repetida STS de 31 de enero de 2023 señala que hay que tener en cuenta las previsiones de la disposición adicional primera de aquella ley, de conformidad con las cuales si la ley aplicable en cada supuesto concreto es especial por razón de la materia que regula, y establece en sí misma un procedimiento completo de elaboración de ordenanzas, serán de aplicación sus normas específicas, sin que en tal caso pueda considerarse necesario acudir a ninguna norma supletoria, ex art. 149.3 CE, para completar la regulación del procedimiento, no siendo, por tanto, de aplicación en tales casos la regulación contenida en el citado art. 133.

QUINTO.- En el supuesto enjuiciado en el presente recurso contencioso-administrativo, el texto de la ordenanza de peatonalización de Alcoy impugnada indica expresamente que se aprueba definitivamente por el Ayuntamiento a tenor de las competencias que en materia de ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas otorga a los municipios el art. 25.2.b) de la LRBRL, así como en virtud de las competencias que para regular el uso peatonal de las calles les atribuye el art. 7 del RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Pues bien, siendo que ese RDL 6/2015, normativa especial por razón de la materia concernida, no establece un procedimiento de elaboración de ordenanzas, ha de concluirse que resulta de aplicación a la ordenanza aquí recurrida, como norma supletoria, la regulación contenida en el art. 133 de la Ley 39/2015, y más concretamente, en lo que particularmente importa, las disposiciones relativas al trámite de consulta pública previa en él prevista. Por lo expuesto, la circunstancia invocada por el Ayuntamiento demandado relativa a que el art. 49 de la LRBRL no contempla dicho trámite no es óbice para considerar aplicable a la elaboración de la ordenanza concernida la regulación prevista en el mencionado art. 133. El propio Ayuntamiento así lo admitió cuando acudió en el procedimiento de elaboración de la ordenanza a ese precepto legal para practicar la consulta pública previa del borrador de “proyecto de ordenanza municipal relativa a la peatonalización en determinadas vías urbanas de Alcoy”.

La cuestión que procede analizar seguidamente es, por tanto, si esa consulta pública previa practicada por el Ayuntamiento se ajustó a las exigencias contempladas en el aludido art. 133 de la Ley 39/2015.

SEXTO.- Del examen del expediente administrativo remitido por el Ayuntamiento demandado se aprecia que éste únicamente sometió a consulta pública previa el borrador de la ordenanza de peatonalización en determinadas vías urbanas de Alcoy, al que adjuntó un plano relativo al ámbito de aplicación. Como aducen los demandantes, en dicho trámite el Ayuntamiento no puso a disposición de los ciudadanos ningún informe técnico ni memoria justificativos del contenido del borrador, omisión que resulta especialmente relevante en lo que afecta al ámbito concreto de aplicación de la ordenanza, que aquél se limitó a justificar con la mera exposición al público del indicado plano a escala 1.000 en el que, según se indicaba en su leyenda, figura en diverso tono de color (verde) la zona peatonal existente y la ampliación de la zona peatonal que se pretendía con la aprobación de la ordenanza, no identificándose en el plano ni siquiera las calles incluidas, enumeradas tan solo en el pie del mismo. Resulta sorprendente que en la leyenda del plano se indique que forma parte de un estudio de peatonalización realizado o encargado por el Ayuntamiento en el año 2020 y, sin embargo, éste no pusiera a disposición de los ciudadanos en la consulta previa tal estudio de peatonalización, de transcendental importancia a efectos de justificar el ámbito, vías y zonas incluidas en la zona peatonal objeto de ampliación por la ordenanza. En la exposición de motivos del borrador sometido a consulta previa se afirma que mediante la ordenanza “se va a proceder a un incremento significativo de las zonas de prioridad peatonal en la ciudad (hasta el momento se han hecho peatonalizaciones puntuales pero de menor calado superficial y social)”, creando “espacios de uso prioritario peatonal”. Se señala también en dicha exposición de motivos que la elaboración de la ordenanza responde “al panorama actual de movilidad en nuestra ciudad”. Pero nada de ello se justifica por el Ayuntamiento en la consulta previa por medio, cabe insistir en ello, de los pertinentes informes técnicos o memorias.

Lo expuesto permite concluir, sin más, que la consulta previa no se realizó por el Ayuntamiento poniendo a disposición de los potenciales destinatarios de la ordenanza y de quienes quisieran realizar aportaciones sobre ella los documentos necesarios, claros, concisos y que reunieran toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia (art. 133.3 de la Ley 39/2015), por lo que mediante ese trámite el Ayuntamiento no recabó de forma real y efectiva la opinión de aquéllos acerca de: a) los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; b) La necesidad y oportunidad de su aprobación; c) Los objetivos de la norma; y d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias (art. 133.1).

El Ayuntamiento de Alcoy incumplió en la elaboración de la ordenanza en cuestión, por tanto, las exigencias del precitado art. 133 de la Ley 39/2015 acerca de la sustanciación del trámite de consulta pública previa, impidiendo con ello a los ciudadanos, entre ellos a los ahora demandantes, expresar su opinión sobre la “concreta realidad que va a someterse al proceso normativo, de la necesidad u oportunidad de éste, de sus objetivos, problemas a solucionar o alternativas posibles, y todo ello, antes de su plasmación en un texto” (STS 3ª, Sección 5ª, de 21 de febrero de 2023 —recurso contencioso-administrativo número 579/2022—, antecitada), al no dar a aquéllos la información necesaria para poder pronunciarse al respecto.

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento demandado rebate las anteriores conclusiones aduciendo que mediante el trámite de información pública del texto de la ordenanza practicado una vez aprobada inicialmente la misma quedaron subsanadas, en cualquier caso, las deficiencias que pudiera presentar la consulta pública previa. La Sala no comparte esa argumentación: tal como ha sido reseñado en el fundamento de derecho tercero de la presente sentencia, la consulta pública previa regulada en el art. 133 de la Ley 39/2015 es un trámite destinado, al igual que el de audiencia e información pública, a instrumentar la participación ciudadana en los procedimientos de elaboración de las disposiciones administrativas, pero, a diferencia de ese trámite, que se articula sobre el proyecto de norma o reglamento ya redactado, el de consulta pública se realiza con carácter previo a la elaboración de tal proyecto, teniendo como objetivo garantizar la efectiva proyección en la futura norma o disposición reglamentaria de las opiniones de sus destinatarios o de quienes realicen aportaciones, a fin de que las mismas puedan ser ponderadas antes de la aprobación inicial del texto que posteriormente se someterá a información pública.

Actualmente se encuentra pendiente de resolver por el Tribunal Supremo (recurso de casación número 7629/2021) la cuestión de interés casacional consistente en determinar si en la elaboración de ordenanzas locales (en ese caso, reguladoras de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias) en las que no se cumplió por la Administración, con carácter previo a su aprobación inicial, el trámite de consulta previa, se está o no ante un defecto formal insubsanable constitutivo de nulidad de pleno derecho. Pero, de todas formas, en el supuesto de autos el trámite de información pública y audiencia sustanciados por el Ayuntamiento de Alcoy en la tramitación de la ordenanza concernida en la presente litis no podía, en ningún caso, subsanar el incumplimiento por aquél de las exigencias contempladas en el art. 133 de la Ley 39/2015 relativas a ese trámite de consulta pública previa, ya que dicho Ayuntamiento, cuando sometió a exposición pública y audiencia el texto inicialmente aprobado de la ordenanza, tampoco puso a disposición de los ciudadanos, como sostienen los demandantes y se desprende del examen del expediente administrativo, los documentos necesarios, claros, concisos y que

reunieran toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia (art. 133.3 de la Ley 39/2015).

OCTAVO.- Sentado todo lo anterior, ha de subrayarse la esencial importancia del trámite de consulta pública previa contemplado en el citado art. 133 de la Ley 39/2015, al estar destinado dicho trámite a instrumentar la participación ciudadana en los procedimientos de elaboración de las disposiciones administrativas que deriva de los mandatos contenidos en los arts. 9.2 y 105.a) de la CE.

El incumplimiento de ese trámite por el Ayuntamiento de Alcoy comporta la declaración por la Sala de la nulidad de la totalidad de la ordenanza aprobada por el mismo, a tenor del art. 47.2 de la Ley 39/2015 y del art. 71.1.a) de la Ley 29/1998, por vulneración por aquél del art. 133 de la Ley 39/2015.

Procede, en suma, estimar el recurso contencioso-administrativo y declarar nula de pleno derecho la ordenanza de peatonalización de Alcoy y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que la aprobó definitivamente.

La estimación, con base en el referido motivo impugnatorio aducido por los actores, de la pretensión principal ejercitada por éstos en su demanda, hace innecesario el examen por la Sala tanto de los restantes motivos de impugnación alegados, al ofrecerse ya por el Tribunal razones que por sí solas son suficientes para fundar su pronunciamiento estimatorio del recurso (en este sentido, STS 3ª, Sección 5ª, de 31 de mayo de 2011 —recurso de casación número 3055/2007—, y STC, 2ª nº 155/2012, de 16 de julio). Resulta asimismo innecesario, al haber sido estimada la pretensión principal formulada por los recurrentes, entrar a examinar la pretensión ejercitada de forma subsidiaria relativa a la declaración de nulidad del art. 8 y Anexo I de la ordenanza.

Cabe añadir, por último, que conforme al art. 72.2 de la Ley 29/1998, el Ayuntamiento de Alcoy deberá, una vez firme la presente sentencia, proceder a publicar su fallo en el periódico oficial en que fue publicada la ordenanza anulada (BOP de Alicante).

NOVENO.- En aplicación del art. 139.1 de la Ley 29/1998, ha lugar a hacer expresa imposición de costas procesales a la Administración demandada, al haber sido desestimadas todas sus pretensiones.

No obstante, la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el art. 139.4 de la citada ley, limita el importe de las costas, fijándolo en la cifra máxima total de 4.000 € por gastos de defensa y representación de la parte actora, ello atendiendo a la actividad procesal desplegada por esa parte, así como a la índole del asunto y a su grado de dificultad, y al número de recurrentes que han interpuesto el recurso contencioso-administrativo.

Por cuanto antecede,

FALLAMOS

1.- Estimar el recurso contencioso-administrativo número 82/2021, deducido por [REDACTED], frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alcoy de aprobación definitiva de la ordenanza de peatonalización de Alcoy (BOP de Alicante nº 33, de 18 de febrero de 2021).

2.- Declarar la nulidad de la referida ordenanza municipal y del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alcoy que la aprobó definitivamente.

3.- Condenar a la Administración demandada al pago de las costas procesales, cuyo importe se limita por la Sala fijándolo en la cifra máxima total de 4.000 € a favor de la parte actora.

La presente sentencia no es firme y contra ella cabe, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162, de 6 de julio de 2016).

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que como LAJ de la misma, certifico.